

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta 096**

Medellín, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA ELENA PUERTA BUSTAMANTE** contra **COLPENSIONES**.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

La demandante solicita que se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de invalidez, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; o en subsidio, la indexación de las condenas.

**Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones expuso que fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** para los riesgos de invalidez, vejez y muerte desde el **22 de julio de 1983**.

La actora cotizó en toda su vida laboral hasta el 31 de mayo de 2017 un total de 920 semanas, de las cuales 525 fueron aportadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Además de lo anterior **Colpensiones** no le contabilizó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de agosto de 2002, el cual fue cotizado a través de la empleadora **Luz Stella Quintero Valencia**.

El día **7 de mayo de 2021**, la demandante fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con una pérdida de capacidad laboral del 53.20% estructurada desde el **5 de agosto de 2020**.

El día **1 de septiembre de 2021**, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, prestación que le fue negada por **Colpensiones** mediante la **Resolución SUB 323360 del 2 de diciembre de 2021**, por no cumplir con el requisito de cotización exigido por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, decisión confirmada en la **Resolución DPE 1133 del 2 de febrero de 2022**.

### **Contestación Colpensiones**

**Colpensiones** a través de apoderado que no es cierto lo referente a las cotizaciones con que cuenta la actora, puesto que revisada su historia laboral se advierte que apenas aportó 170 semanas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no es viable validar las semanas presuntamente aportadas por la empleadora, toda vez que las mismas no han sido pagadas a entera satisfacción de la AFP. Referente a los demás hechos expresó que son ciertos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

### **Sentencia de Primera Instancia**

El Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **14 de marzo de 2023**, **absolvió** a la demandada del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada por encontrar que no se cumplen los presupuestos establecidos por el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa a prestaciones causadas en vigencia de la Ley 860 de 2003, esto que la invalidez se estructurara en los 3 años anteriores al 26 de julio de 2006.

En lo referente a la aplicación del test consagrado en la sentencia SU-556 de 2019, indicó que no se hizo ningún esfuerzo probatorio para demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Alto Tribunal para de forma excepcional aplicar el Decreto 758 de 1990, por lo que negó la prestación solicitada.

Esta decisión no la compartió el apoderado de la parte demandante motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos generales:

### **Recurso de apelación parte demandante**

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto la demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa por cuanto cotizó 525 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debiéndose dar aplicación a la sentencia SU-556 de 2019.

En caso de que no se acceda a la pretensión de la pensión de invalidez, se estudie la pensión especial de vejez por deficiencia, esto teniendo en cuenta que la actora en toda su vida laboral aportó más de 1000 semanas de cotizaciones contabilizadas las semanas aportadas por la empleadora **Luz Stella Quintero Valencia**.

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Colpensiones** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia.

## **CONSIDERACIONES**

### **Problema Jurídico**

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto, serán: (i) Determinar si la demandante cumple con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-556 de 2019 para en virtud del principio de la condición más beneficiosa realizar un salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y el Decreto 758 de 1990 y (ii) Establecer si el Tribunal cuenta con competencia para resolver respecto de aspectos que no fueron reclamados en desarrollo de la reclamación administrativa y que no fueron objeto de pretensión con la demanda.

### **Pruebas relevantes**

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **María Elena Puerta Bustamante** fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** el 22 de julio de 1983 cotizando a esa entidad un total de 920 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 170 fueron aportados con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 (05/pág.12).

2. Se observa en la misma historia anotación de semanas aportadas por el empleador **Luz Stella Quintero Valencia** entre el ciclo 199501 y 200208 aportes realizados el día 15 de noviembre de 2017, los que **Colpensiones** desconoce con la anotación “*No registra la relación laboral en afiliación para este pago*” (05/págs.14-16).
3. La señora **Puerta Bustamante** fue calificada por **Colpensiones Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** mediante dictamen 094366 del 7 de mayo de 2021 en el que le asignó una pérdida de la capacidad laboral del 53,20% estructurada desde el 5 de agosto de 2020 (05/págs.5-11).
4. La actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez el día **1 de septiembre de 2021**, prestación que le fue negada por **Colpensiones** por medio de la **Resolución SUB 323360 del 2 de diciembre de 2021**, por no cumplir con el requisito de 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores al cumplimiento de la edad (05/págs.26-30).
5. Esta decisión fue confirmada mediante la **Resolución DPE 1133 del 2 de febrero de 2022** (05/págs.34-39).

Efectuadas las anteriores anotaciones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

### **El principio de la Condición más beneficiosa**

Por regla general las contingencias en materia de seguridad social están cobijadas por la ley vigente al momento de su ocurrencia, y solo por vía excepcional y en ciertas circunstancias se puede acudir a una especie de ultractividad de la ley sustancial en el tiempo para estudiar la procedencia del derecho, esta elaboración teórica ha sido denominada por la jurisprudencia como principio de la condición más beneficiosa.

La condición más beneficiosa supone la existencia de un tránsito legislativo que modifique las condiciones particulares para acceder a un derecho del cual ya se cumplía al menos una condición, en el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivientes se habla de un derecho eventual de quien cumplía con los requisitos de cotización de la norma derogada y sufre la contingencia en vigencia de la nueva.

En palabras de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el principio de la condición más beneficiosa: “...*entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede*

*modificar el régimen pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbi gratia, haber cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación de índole pensional.”* (Sentencia 38674 de 25 de julio de 2012).

No obstante lo indicado, el máximo órgano de la Justicia Ordinaria Laboral ha establecido una serie de sub-reglas para que se pueda dar aplicación a la condición más beneficiosa: (i) Se debe aplicar la norma inmediatamente anterior (Sentencias SL7275-2015, SL4559-2019 y SL4987-2019), (ii) en el caso de que se reclame la aplicación de la Ley 100 de 1993 la invalidez debe haberse estructurado entre el 28 de diciembre de 2003 y el 28 de diciembre de 2006 (SL-2358-2017 y SL-4650 de 2017) y (iii) deben cumplirse las condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993 antes de la entrada en vigencia de la nueva ley y a la fecha de estructuración de la invalidez.

Por su parte la Corte Constitucional al hacer un estudio de este precedente en la sentencia SU-556 de 2019, encontró que el mismo: “...*no es prima facie manifiestamente inconstitucional ni desconoce el principio de la condición más beneficiosa, pues su aplicación se ha fundamentado en la interpretación general que respecto de tal principio ha hecho la jurisprudencia constitucional*”, indicando que no puede ser aplicado a las personas que cumplan con el test de procedencia que fuera establecido en la sentencia SU-005 de 2018.

Los requisitos del aludido test de procedencia que deben ser cumplidos de forma necesaria y conjunta, son: (i) Debe acreditarse que quien reclama la prestación además de ser una persona en situación de invalidez, hace parte de un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: analfabetismo, vejez, pobreza extrema, cabeza de familia, desplazamiento o padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa; (ii) Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas, (iii) Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez, (iv) Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

En lo que tiene que ver con la señora **María Elena Puerta Bustamante** pese a soportarse la pretensión y el recurso sobre la aplicación de la sentencia SU-556 de 2019 ninguna prueba aportó la parte actora tendiente a demostrar cada una de las condiciones que fueron establecidos por la jurisprudencia, carga que le era exigible en aras de acceder al derecho reclamado, por lo que en este caso le asistió razón al juez de primera instancia, al negar la aplicación excepcional del Decreto 758 de 1990, pues no se acreditó el cumplimiento de las condiciones del test de procedencia, por lo que en este aspecto se debe **confirmar** el fallo apelado

### **De la solicitud de la pensión de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial**

Se solicita por parte del demandante en su recurso de forma subsidiaria a la pensión de invalidez que se analice lo referente al reconocimiento de la pensión de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial consagrada en el parágrafo 4° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Con respecto a esta petición debe indicarse que respecto de la misma no se advierte en el expediente prueba de la reclamación administrativa presentada a **Colpensiones**, así como tampoco se plantea como una de las pretensiones de la demanda para entender que respecto de la misma no se presentó la excepción previa de falta de competencia, por lo que al tratarse de una pretensión novedosa introducida con el recurso de alzada, encuentra esta Sala que no es posible su análisis debiendo recordar en este aspecto lo expresado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL8603-2015 en la que expresó:

En este caso se observa que la demandante le solicitó administrativamente al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, según se infiere de la Resoluciones Nos. 000982 de 2005 y 1251 de 2007 (Folios 3 a 5), es decir, la promotora del proceso agotó la reclamación administrativa en relación con la pensión de vejez, pero no la agotó respecto de la pensión de invalidez, que fue la que finalmente ordenó el juez de primera instancia (...)

En estas condiciones, concluye la Sala que el ad quem no cometió ningún error jurídico al estimar que no podía el juez de primera instancia analizar la procedencia y ordenar el pago de la pensión de invalidez, en la medida en que lo que había solicitado la demandante era el reconocimiento de la pensión de vejez prevista por el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993.

A partir de lo anterior es claro para esta Sala que no cuenta con competencia para resolver el supuesto que el recurrente pretende adentrar a través del recurso de apelación, por lo que en este punto ningún pronunciamiento hará, puesto que debe adelantar ante **Colpensiones** la respectiva reclamación administrativa y si esta entidad no accede por la vía administrativa bien puede llamarla a juicio para que en el mismo bajo la garantía del debido proceso exponga los hechos y fundamentos de derecho en los que soporta su pretensión.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de la demandante por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. El valor de las agencias en esta instancia a cargo de la actora y en favor de **Colpensiones** se fijan en la suma de **\$1'160.000**.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia de primera instancia proferida por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día **14 de marzo de 2023**, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **MARÍA ELENA PUERTA BUSTAMANTE** contra **COLPENSIONES**.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la demandante. El valor de las agencias en esta instancia a cargo de la actora y en favor de **COLPENSIONES** se fijan en la suma de **\$1'160.000**.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

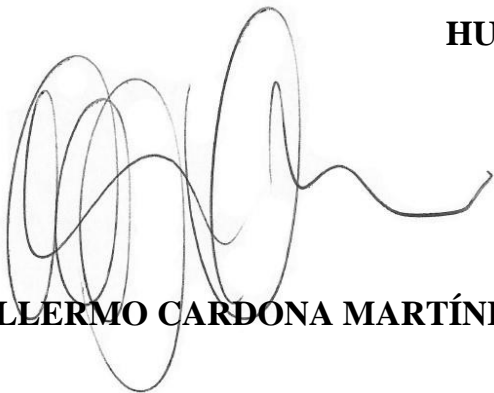
### **LOS MAGISTRADOS**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**





**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	María Elena Puerta Bustamante
<b>Demandado</b>	Colpensiones
<b>Radicado</b>	05001-31-05-016-2022-00083-01
<b>Decisión</b>	Confirma sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 25 de mayo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 25 de mayo de 2023 a las 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**